



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 7796/2024 AML

Autos: "POLLOLIN S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA"

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 7796/2024

Buenos Aires,

I.- Surge de autos que mediante la Resolución 2023-11069-E-AFIP-DEIMPR#SDGTLSS, AFIP no hace lugar al pedido de revisión incoado por la contribuyente POLLOLIN S.A., CUIT Nº 30-55092364-1, todo ello de acuerdo al dictamen que le antecede.

II.- Contra ello, la recurrente interpuso recurso de apelación. Asimismo, se hizo saber a la rubrada, que la admisibilidad del recurso de apelación estaba sujeta al depósito del importe de la deuda que en definitiva se estableciera, actualización e intereses, de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente el que debería hacerse efectivo dentro del mismo plazo de interposición del recurso (art. 9 ley 23.473 y art. 15 de la ley 18.820 y sus modificaciones). Al respecto, en el escrito recursivo ofrece a los efectos de garantizar el interés fiscal, sustitución por garantía real. A tal efecto acompaña certificado de dominio de la planta Frigorífica.

III.- Así, corresponde señalar que el art.15 de la ley 18.820 (modificado por ley 23.473) expresamente dispone que "...deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso", y el art. 39 bis del decreto ley 1285/58 modificado por el art. 26 de la ley 24.463 dispone que deberá depositarse el importe resultante de la resolución impugnada.

Con relación a las disposiciones de diferentes leyes que supedita la concesión del recurso a que previamente se pague el importe pertinente, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene declarado que no resultan violatorias del art. 18 de la Constitución Nacional, si no se ha alegado y probado que aquella reviste desproporcionada magnitud con relación a la concreta capacidad económica del recurrente.

Idéntico criterio es el que prevalece en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos y recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar los arts. 15, segunda parte, de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864, (ver fallos 215:225 y 501; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 y 240; 296:40 y 57; 307:1753).



En síntesis, dentro de este orden de ideas, es dable señalar que el Más Alto Tribunal de la Nación ha aceptado la posibilidad de eximir de la exigencia del pago previo a la apelación en supuestos de excepción que contemplen situaciones patrimoniales concretas de los afectados a fin de evitar que aquel pago se traduzca en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio. A tal efecto estableció, con el objeto de evitar que las excepciones desvirtúen la aplicación del principio general, que lo que ha de valorarse para eximir el pago inmediato en supuestos de multa no son las dificultades de su oblación derivadas de desequilibrios financieros o de circunstancias particulares del giro de los negocios de la demandada, sino que a través de ella, se verifique un importante desapoderamiento de bienes de la demandada. (doctrina de Fallos 247:181; 205:20), o una desproporcionada magnitud entre el monto a depositar en relación a la capacidad económica del apelante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones ( Fallos 256:38; 261:101).

Ello así, quien pretende eximirse del pago exigido por las normas en cuestión debe aportar acabada y fehaciente prueba acerca que se encuentra alcanzado por alguna de las hipótesis de excepción de creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dicho ello, si bien se han admitido sucedáneos del depósito previo -vgr. constitución de un seguro de caución-, ello ha tenido lugar en tanto y en cuanto los mismos garanticen al fisco la satisfacción inmediata y total de su crédito; entendiéndose que no son cumplidas dichas circunstancias con el mero ofrecimiento de un inmueble en garantía para -eventualmente- constituir un embargo o hipoteca, porque deviene de mayor riesgo, complejo y condicionando a la propiciación de diligencias administrativas y judiciales que, en definitiva, dilatan el procedimiento (cfr. C.F.S.S, Sala I, sent. del 11.03.02, "Del Hierro, Jesús María"). Ello así, la presentación de un certificado de dominio, no suple la finalidad perseguida con la exigencia del depósito previo, ni garantiza claramente el pago del monto controvertido.

Por todo lo expuesto, atento a que la recurrente no dio cumplimiento con el requisito establecido en el art. 15 de la ley 18.820, sin que probara de modo efectivo y concreto hallarse comprendido en las situaciones de salvedad previstas para supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, (conforme la doctrina del Alto Tribunal citada precedentemente), corresponde declarar desierto el remedio procesal intentado.

IV.- Dado el resultado alcanzado, dada la particularidad de la temática abordada, pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas de ambas instancias deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).





Poder Judicial de la Nación

**CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1**

La Dra. Viviana Piñeiro no vota en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: I- Declarar desierto el recurso interpuesto; II- Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese y remítase.

